

Ponencia para el XXIX Congreso Anual de la SOMEE 2018, Monterrey, Nuevo León

El Tribunal Electoral y tres temas políticos: las candidaturas, la representación proporcional y la nulidad de comicios

Por Dr. Luis Eduardo Medina Torres, UAM Iztapalapa, correo: lemt6810@gmail.com

Resumen

La ponencia pasa revista a los criterios recientes del órgano jurisdiccional electoral relativos al ajuste de las candidaturas en las postulaciones de los partidos políticos, la aplicación de la representación proporcional para la integración de órganos colegiados de representación política y la determinación de anular elecciones por causales relativas a la violación de principios constitucionales. La premisa de la que se parte es que si bien la reforma de 2014 avanzó en precisar algunos aspectos también es cierto que dejó un amplio margen a la interpretación del órgano jurisdiccional electoral.

En la primera sección de la ponencia se revisan unos elementos conceptuales mínimos para comprender el rol de la justicia en el proceso de gobernanza electoral. Posteriormente, se analizan los nudos problemáticos de las tres temáticas, específicamente las inconsistencias normativas. En una sección posterior, se estudian casos emblemáticos de problemas en candidaturas, en representación proporcional y nulidad de comicios. La sección final son las conclusiones que tienen como sentido observar la estabilidad o no de los criterios generados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en las tres temáticas planteadas.

Palabras clave: Gobernanza Electoral, Instituciones Electorales, Representación Proporcional, Nulidad de Elecciones, Candidaturas

Introducción

La premisa de la que parte esta ponencia es que, si bien la reforma electoral de 2014 avanzó en precisar varios aspectos de la administración electoral (Medina, 2016), también es cierto que la misma reforma dejó un amplio margen a la interpretación del órgano jurisdiccional electoral (Medina, 2015). Para verificar la premisa anterior pasamos revista a tres temáticas que han denotado diversos problemas y han tenido que ser resueltas mediante interpretaciones en sede jurisdiccional: casos de candidaturas, de integración de órganos colegiados y de nulidad de elecciones.

Si bien se comprende que la generalidad de ley deje espacios de indeterminación que deben ser completados por los órganos electorales, ya sea en sede administrativa o jurisdiccional, cuando es recurrente la necesidad de interpretaciones, entonces, es pertinente evaluar la norma específica y preguntarse sino más bien existe una falla en el diseño normativo que lleva a recurrir constantemente a la autoridad para que termine de resolver las dificultades que se presenten. De ahí que es conveniente tener un medio de salida en el marco de la gobernanza electoral, empero, cuando tal medio se tiene que activar constantemente es necesario revisar la normatividad para determinar si existe una falla desde el diseño que tenga que ser enmendada o corregida en una futura reforma electoral.

1. Elementos conceptuales

En esta primera sección se revisan unos elementos conceptuales mínimos para comprender el rol de la justicia en el proceso de gobernanza electoral. Este proceso tiene su origen en el diseño de las normas en sede legislativa que es competencia de los congresos, posteriormente se desarrolla la gobernanza con la aplicación de las normas en sede administrativa que es competencia de los órganos electorales y se finaliza con la resolución de disputas en sede jurisdiccional que es competencia de los tribunales. En algunas ocasiones se acude a los órganos regionales encargados de los derechos humanos (Medina y Ramírez, 2015).

La ventaja de observar desde la gobernanza el proceso electoral es que nos permite tener una visión completa e integral de todo el ciclo comicial porque hay un permanente diálogo e intercambio de comunicaciones y mensajes entre las sedes administrativa y jurisdiccional,

además de estas dos con respecto a la sede legislativa a la que recurrentemente le mandan datos para posibles reformas futuras debido a las nuevas problemáticas y a problemas añejos no resueltos.

De esta forma, la gobernanza electoral es entendida como el proceso que permite abordar de forma completa e integral un ciclo de comicios, sean estos de orden nacional, sub nacional o ambos, independientemente que sean para cargos ejecutivos, legislativos, municipales o todos en conjunto. Es una perspectiva general de carácter procesal que nos permite un abordaje global con lo que las diversas fases de un proceso comicial están cubiertas y nos permite comprender porque algunas decisiones regresan a la sede administrativa e incluso porque algunas otras ponen en cuestionamiento las definiciones normativas y políticas que se toman en sede legislativa.

La ventaja inherente a la gobernanza electoral que es la revisión completa del ciclo comicial es, al mismo tiempo, su mayor dificultad: tener que realizar abordajes integrales que comienzan en los congresos o parlamentos, pasan a los órganos administrativos y terminan en los tribunales de elecciones, existiendo la posibilidad que esta última fase sea desde el orden sub nacional al nacional. Su dificultad inherente es que se precisa una visión integral con lo que no es posible revisar solamente la ley, ni únicamente los acuerdos y resoluciones administrativos ni tampoco sólo estudiar sentencias electorales, es preciso abordar a las diversas decisiones institucionales para obtener el sentido que se pretendía llevar a cabo por parte de las autoridades electorales.

El problema con el sentido de las decisiones es que tienden a ser confusos los argumentos y también las explicaciones de sus argumentaciones que llegan a dar los responsables de las decisiones, por lo que es necesario estudiar sus argumentos y explicaciones e intentar un ejercicio interpretativo, en ocasiones de un sentido más amplio que el desarrollado inicialmente. Con ello, encontrar el sentido de las decisiones en ocasiones es como el hilo de Ariadna que casi al final de tenerlo lo volvemos a perder, lo que se convierte en una tarea afanosa y recurrente.

Para que la tarea no sea más complicada de suyo, la gobernanza electoral nos debe servir para reconstruir tal sentido intentando plantear nudos problemáticos que nos permitan abordar el ciclo electoral, comprendiendo desde un inicio que existen dificultades incluso desde el

diseño normativo y no solamente en las fases administrativa y jurisdiccional. Esto es lo que pretendemos realizar con las dos secciones siguientes, tomando como caso de estudio las elecciones concurrentes que se efectuaron en México durante 2018.

2. Las inconsistencias normativas de la reforma de 2014 en tres temáticas seleccionadas: candidaturas, nulidades y representación proporcional

En esta sección vamos a analizar los nudos problemáticos de las tres temáticas seleccionadas, específicamente las inconsistencias normativas que presentan cada una de aquellas. La regulación de las candidaturas está inmersa en la tensión que se presenta desde la misma ley de partidos entre la auto organización de los estos y el cumplimiento de sus estatutos (LGPP). Esta es una tensión que ya se había presentado desde antes de la reforma de 2014 y que está configurada alrededor de un supuesto básico: los partidos políticos deben ser democráticos a su interior como ellos mismos piden democracia en el régimen político, es lo que Arzuaga (2012) ha denominado como la tesis de identidad: la autoridad electoral construyó una identidad entre los partidos y el régimen político con lo que los requisitos para considerar democrático al régimen extendidos a los partidos.

El problema con el argumento anterior es que, entonces, la vida interna de los partidos y su consecuente auto organización quedan restringidos al cumplimiento de los requisitos constitucionales con lo que su vida interna queda disminuida, llevando al extremo que la mayor parte de sus decisiones pueden ser enmendadas por las autoridades electorales, específicamente las correspondientes a los puestos de elección popular, lo que ha justificado la intervención de institutos y tribunales en las decisiones de los partidos (González y Báez, 2010).

Aunado a lo anterior, se han presentado nuevas problemáticas como las correspondientes a los casos de re elección consecutiva en ayuntamientos y diputaciones locales, la adscripción de género de las personas postuladas y cuestionamientos a la inelegibilidad de personas que han ocupado cargos públicos de diverso tipo con antelación a la postulación por un partido político. Asuntos que en su mayoría no tienen regulación en las leyes electorales lo que ha implicado que las autoridades han tenido que tomar decisiones sin mayor respaldo jurídico.

La re elección es una novedad de la reforma de 2014 por lo que si bien las legislaciones estatales intentaron prever las regulaciones específicas, lo cierto es que se han visto rebasadas al poner en tensión el principio de equidad en la contienda con candidaturas que están en el ejercicio del cargo y que se postulan para la re elección. Es sumamente complejo articular la equidad en la contienda con la posibilidad de re elección porque es claro que quienes están en el cargo tienen condiciones diferentes de quienes pretenden competir por primera ocasión.

Otro nudo problemático no contemplado en la reforma de 2014 en una arista diferente a la re elección son las personas que ocuparon en el corto y el mediano plazo cargos de elección popular o de designación. Si bien existe una regla general de incompatibilidad el problema es determinar cuáles son los cargos en los que aplica; a guisa de ejemplo, haber sido consejera electoral local es una incompatibilidad y haber sido comisionada nacional de acceso a la información no lo es, según la explicación que se ha dado es que en el primer caso hay posibilidades de injerencia y en el segundo no. La argumentación es francamente débil porque tendría que ser igual para ambos casos, ya fuera en el sentido de permitir o de restringir la postulación.

Un nudo adicional en las candidaturas totalmente distinto a los anteriores y del que no existe previsión legal es la adscripción por género de las personas. Como la ley establece género donde debería decir sexo, las personas tienen que auto definirse para determinar en cuál género se ubican, lo que lleva a la discusión de cuántos y cuáles son los géneros previstos y si pueden ser contabilizados los escaños de un género por otro. Aquí la falta de previsión normativa y la falta de acuerdo para poner sexo en lugar de género ha provocado dificultades mayores como la de personas con nombres y apariencia masculina que fueron registradas como personas femeninas.

Respecto a la representación proporcional, la problemática se encuentra en la panoplia de diseños estatales que cada vez son más abigarrados (Constitución, art. 116), aunque constantemente han tenido el mismo sentido: fortalecer la vía mayoritaria en detrimento de la proporcional para favorecer a los partidos más grandes (legislaciones de Aguascalientes y de Baja California Sur).

En el ámbito federal la mayor dificultad ha estribado en la votación calculada para la pérdida de registro nacional de partidos que es contradictoria en la misma ley (LEGIPE Y LGPP) y

recientemente la adscripción de las candidaturas ganadoras en los escaños de mayoría relativa que tienen relación directa con la representación proporcional (demandas de RP en 2018).

En el caso de las nulidades por violación a principios constitucionales están mal diseñadas desde la constitución (Constitución, art. 41), han sido peor aplicadas por los órganos administrativos y han sido mal definidas por los tribunales. Esto ha llevado a una situación paradójica: el cumplimiento es sumamente difícil pero su demostración es casi imposible con lo que se han convertido en letra de la ley sin consecuencia.

En síntesis, las tres temáticas seleccionadas muestran dificultades de aplicación que han tenido varias de ellas su origen en el mismo diseño de las reglas, esto es, la gobernanza en sede legislativa o política con lo que de darse una nueva reforma electoral sería conveniente revisar varios de los aspectos normativos. Ahora veremos las dificultades de aplicación en sedes administrativa y jurisdiccional.

3. Casos problemáticos de las tres temáticas

En esta sección se estudian casos emblemáticos de problemas en candidaturas, en representación proporcional y nulidad de comicios. Las tres temáticas tienen a su vez problemas específicos por lo que serán abordadas por conjuntos de problemáticas.

Candidaturas independientes: registros del Bronco y del Jaguar

El caso de las candidaturas sin partido o independientes lo revisamos en esta sección por ser un tema correspondiente a las postulaciones, aunque no a los partidos políticos. Hubo un listado amplio de postulantes entre periodistas, profesores, políticos; sin embargo, solamente tres de las candidaturas habían cumplido, inicialmente con los requisitos.

Luego en una decisión desacertada del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que dos de ellos habían manipulado sus registros y que no cumplían con el número de firmas necesario para ser postulados. Los inconformes acudieron al TEPJF y éste en una decisión paradójica ordenó el registro de uno (el Bronco) y la revisión de las firmas del otro (el Jaguar). Calificamos la decisión de paradójica porque los casos eran muy similares tanto en sus

peticiones como en las omisiones detectadas, por lo que a pesar de la defensa de los magistrados que, por mayoría aprobaron las sentencias, lo pertinente era ordenar lo mismo en ambos casos que en nuestra opinión era revisar las firmas de las dos candidaturas.

Ahora más allá de nuestra opinión es claro que el tratamiento a las candidaturas sin partido desde la normatividad y su aplicación en el ámbito administrativo fue sumamente deficiente. Es necesario revisar la legislación en esta problemática para que las autoridades tengan menos espacios para la interpretación normativa y se evite que aquellas generen respuestas paradójicas.

Candidaturas y elegibilidad: casos de Michoacán (SUP-REC-709/2018), Hidalgo (SUP-REC-871/2018), Veracruz (SUP-REC-816/2018 inelegible), Chiapas (SUP-REC-874/2018) y Nayarit (SUP-REC-822/2018 inelegible)

Todos los casos de este apartado están en la disputa sobre cuáles son los cargos previos que son incompatibles con postulaciones legislativas. Son de llamar la atención los casos pero también las respuestas tan disímolas que se dieron a los mismos, ya que en algunos se determinó que los cargos previos sí eran incompatibles y en otros casos se consideró que no existía tal incompatibilidad. Este es un problema normativo que fue acrecentado por las autoridades electorales, veamos los que fueron declarados incompatible e inelegible para contrastarlos con los que fueron validados.

En el estado de Veracruz una candidata a diputada federal, que era diputada local con licencia y que había sido consejera electoral local del mismo INE fue, en primera instancia, aceptada para ser registrada, luego ganó la elección y en la fase impugnativa fue cuestionada por ser incompatible no el cargo de diputada local sino su encargo previo como consejera electoral. En una sentencia extraña las salas del TEPJF consideraron que, efectivamente, el cargo de diputada local no era incompatible pero su encargo anterior de consejera sí lo era porque pudo haber influido en el ánimo de los electores con lo que se le declaró inelegible y si bien su partido mantuvo el escaño ganado fue la suplente la que accedió a la cámara. Es de llamar este caso porque en una polémica semejante de una postulada por representación proporcional que recientemente había renunciado a ser comisionada nacional de acceso a la

información fue validado su registro y, por ende, pudo ocupar el escaño. No queda claro porque el cargo de consejera electoral local sí es incompatible, mientras que el de comisionada nacional de acceso a la información no lo es o si bien tiene que ver con que el primer caso fue por la vía mayoritaria y el caso segundo por la proporcional.

Aquí también es claro que se requiere revisar la legislación y establecer taxativamente el catálogo de incompatibilidades para que desde el principio quede establecido cuáles son los cargos previos que se vuelven incompatibles con las postulaciones. Si se mantiene el criterio de influencia en los electores tendría que ser un catálogo amplio porque casi cualquier cargo tiene relación con los potenciales votantes.

Un caso de inelegibilidad se suscito en el estado de Nayarit, en éste fue por la temporalidad con que se separó un ex religioso de su función eclesiástica. La ley de asociaciones religiosas que regula a las iglesias y sus integrantes establece que para que un ex religioso ejerza su derecho a ser electo tiene que separarse de su ministerio cinco años antes de la postulación. En este caso el candidato ganó el escaño senatorial pero fue declarado inelegible porque no cumplía con el periodo establecido; así, aunque la autoridad administrativa lo había validado, las salas del TEPJF lo declararon inelegible y determinaron que el periodo de separación de cinco años era una medida necesaria para garantizar el principio de laicidad del estado mexicano.

En este caso la ley es clara respecto a la restricción, empero, la autoridad administrativa que, en principio, fue la instancia que recibió la documentación y validó el registro del ex religioso no revisó la temporalidad de separación de su función eclesiástica y fue hasta que se impugnó el registro en sede jurisdiccional que se realizó una revisión integral del expediente. Aquí no hubo falla en la ley sino en la aplicación de esta.

Candidaturas y adscripción: Chiapas (SX-JIN-22/2018) y Oaxaca (SUP-JDC-304/2018)

En este apartado revisamos dos casos disímboles, uno por adscripción en materia indígena y el otro por adscripción de género. Ambos tuvieron una solución similar y se aplicó la decisión a partir de precedentes en materia indígena lo que fue consistente con esa línea

jurisprudencial pero no para el otro caso porque no se tomaron los precedentes de género sino de una materia diferente.

En el estado de Chiapas unos candidatos a diputados federales se postularon mediante una acción afirmativa en materia indígena, aunque su postulación fue impugnada desde el principio porque se auto adscripción no correspondía ni con sus antecedentes personales ni tampoco con sus actividades profesionales. Empero, las salas del TEPJF determinaron que en materia indígena era suficiente la declaratoria y el respaldo de alguna comunidad con lo que validaron el triunfo de los candidatos electos.

En el estado de Oaxaca se presentaron casos de personas que con nombres masculinos y apariencia masculina se auto adscribieron como personas femeninas. La sala regional Xalapa, primero y luego la sala superior, consideraron que las personas que desde un inicio se registraron como mujeres debían ser tenidas como tales, mientras que los casos donde hubo cambio de adscripción de género fueron declarados inelegibles porque no se puede variar la auto adscripción. Así, se validaron los registros de dos personas que a pesar de sus nombres y apariencias debían ser consideradas como mujeres tanto para la postulación como para la asignación de escaños de representación proporcional.

Si bien el tema de adscripción indígena ya tiene precedentes en postulaciones desde 2009 que han mantenido la tesis de que la declaratoria por parte de los interesados y alguna documental de una comunidad indígena son elementos suficientes, la adscripción por género es una nueva problemática que no tiene regulación específica y que probablemente en el corto plazo tiene que ser revisada porque tenderá a generar dificultades mayores cuando se exijan cuotas para más de dos géneros.

En lo correspondiente a la adscripción, ya sea por género o en materia indígena hay vacíos normativos, dificultades de aplicación y problemas de interpretación con lo que es indispensable revisar estas problemáticas en una futura reforma electoral, ya sea para establecer requisitos específicos o bien para construir una determinación general que tienda a evitar polémicas recurrentes.

Candidaturas, sustituciones y coaliciones: impugnaciones y sentencias de RP (SUP-REC-943/2018, SUP-REC-940/2018)

Los casos más polémicos en la temática de candidaturas se presentaron en las postulaciones de los diputados federales y los senadores. En estas hubo dificultades por las sustituciones y por el punto de la contabilidad de los escaños de mayoría relativa que sirven para calcular los de representación proporcional, además de los sesgos de sobre y sub representación que están inmersos en las reglas de asignación de RP.

Respecto a las sustituciones las autoridades electorales fueron consistentes al considerar que los registros válidos eran los últimos que habían presentado los partidos políticos, ya fuera de manera individual o por coalición. En este punto no hubo necesidad de mayor interpretación, pero sí fue fuente de polémica tanto en sede administrativa como en la jurisdiccional con lo que el INE y el TEPJF tuvieron que contestar un cúmulo importante de solicitudes incluso de opinión y de demandas por las sustituciones.

Por su parte, las postulaciones de candidaturas de las coaliciones fueron fuente de un litigio que se resolvió el día anterior a la instalación del congreso por las implicaciones que tuvo para la conformación de las cámaras de diputados y senadores. En este apartado revisamos lo correspondiente a las candidaturas y en otro posterior su impacto en la RP.

El problema inicial es la jurisprudencia 29/2015 que en aquel año permitió la postulación de militantes priístas mediante el registro del partido verde, en ese año se les llamó a estos casos diputados “sandía”: verdes por fuera refiriéndose a la postulación por el PVEM y rojos por dentro respecto a su militancia en el PRI. Las autoridades electorales en esa ocasión determinaron que esto era posible por ser una coalición entre ambos partidos con lo que no se vulneraba la legislación y el TEPJF estableció la jurisprudencia cuyo rubro es: **Candidatos a cargos de elección popular. Pueden ser postulados por un partido político diverso al que se encuentran afiliados**, cuando exista convenio de coalición (énfasis añadido)

Para 2018 se presentó la misma dificultad ahora con la coalición de los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social; los dos últimos postularon militantes del primero que fueron adscritos a los partidos y validados para la coalición mediante la jurisprudencia 29/2015. A pesar de discusiones interesantes en el INE y en el TEPJF, con sendos votos particulares de

consejeros y magistrados, la mayoría en ambos órganos validó las postulaciones y las candidaturas ganadoras fueron registrados por el partido político que los registró, a pesar de ser militantes acreditados de MORENA como su coordinador parlamentario en la cámara de diputados que fue postulado por el PT. La consecuencia de la decisión anterior es que la bancada de MORENA el día de la instalación del congreso tuvo 247 diputados, casi la mayoría absoluta de tal órgano legislativo.

Es claro que en esto hay problemas en la legislación y en la interpretación de las normas. Tan es así que el voto concurrente en el TEPJF pidió la revisión y posible interrupción de la jurisprudencia multi referida porque es claro que ha generado más problemas que los que se supone logró resolver en 2015 y ahora en la aplicación de 2018.

En recapitulación, parece que en la etapa de registro el tribunal está dispuesto a corregir candidaturas pero en la etapa de asignación ha determinado mantener las listas, esto ha implicado que en la fase de registro ha prevalecido el cumplimiento de los principios democráticos en los estatutos, mientras que en la fase de asignación ha sido la auto organización el criterio relevante.

Resultado y cambio de ganador: Durango (SUP-REC-820/2018 y acumulado) y Yucatán (SUP-REC-782/2018)

Hubo dos casos de cambio de ganador en un escaño de mayoría relativa que fueron en el distrito cuatro del estado de Durango y en el distrito tres del estado de Yucatán, teniendo la misma dinámica impugnativa. En primera instancia, el consejo distrital del INE había determinado como ganador al candidato de la coalición por México al frente y le entregó la constancia de mayoría. Inconforme con la decisión, la coalición Juntos haremos historia impugnó el resultado; la sala regional respectiva (Guadalajara y Xalapa) después de revisar la demanda consideró que debían anularse algunas casillas y modificar el cómputo distrital pero al no alterarse el sentido del ganador se mantuvo a la fórmula que había declarado como ganadora el consejo distrital del INE.

La sentencia de la sala regional fue impugnada ante la sala superior del TEPJF y esta determinó anular una casilla adicional y volver a modificar el cómputo distrital con lo que en

esta re composición sí varió el sentido del ganador y le fue adjudicado el escaño a la coalición Juntos haremos historia. Este es un caso claro de cómo la revisión por diversas instancias, aunque sean de un mismo órgano, lleva a soluciones y respuestas diferenciadas. Aquí las previsiones legales fueron suficientes y la aplicación de aquellas por las autoridades electorales, especialmente las jurisdiccionales, fue adecuada.

Representación proporcional, sobre representación y desproporcionalidad: sentencias SUP-REC-934/2018

La temática de representación proporcional es una problemática en sí misma, primero, por cuestiones generales de mala comprensión y, luego, por asuntos específicos relativos al diseño de las reglas y a su aplicación. Las dos cuestiones generales que no están comprendidas en la RP son las relativas al sentido de esta familia de fórmulas electorales y la definición para el caso mexicano.

La RP no está bien comprendida porque no se ha entendido su sentido específico: generar pluralismo y representatividad en el órgano legislativo, aún a costa de la gobernabilidad en el mismo órgano. La RP apuesta por reflejar la composición del electorado y no por obtener una mayoría definida, esto es lo que la literatura especializada ha explicado. Sin embargo, para el caso mexicano se ha visto como un complemento, un aditamento sumado a la fórmula de mayoría relativa, lo que ha generado distorsiones de comprensión, de diseño legal y de aplicación por las autoridades electorales.

De comprensión porque se le ha denominado como sistema electoral segmentado o bien mixto cuando en realidad el mexicano es un sistema combinado, por lo que lo que resulta en mayoría relativa afecta y modifica en la representación proporcional, por eso casos como lo del cambio de ganador en un distrito o bien la contabilidad de los escaños de mayoría relativa por partido político terminan afectando la distribución por RP.

También hay problemas en el diseño legal porque se han ido incorporando cláusulas a la fórmula electoral que vuelven sumamente compleja sino es que francamente imposible la distribución como son los ejemplos del sesgo de sub representación o la asignación directa de escaños a los partidos que superan el umbral legal para no decir algo sobre las listas de

mejores perdedores en distritos uninominales. El problema es que muchas de estas cláusulas son medidas que se derivan de la vía mayoritaria con lo que generan resultados muy desproporcionales que tienden a favorecer a los partidos mayoritarios.

Finalmente, también se presentan problemas de aplicación como quedó evidenciado en las discusiones en el INE y en el TEPJF, además de los votos particulares en los acuerdos y las sentencias que por mayoría fueron aprobados por consejeros y magistrados, lo que se denotó más aún con el voto concurrente que solicitó la interrupción de la jurisprudencia 29/2015 con la que se basaron las mayorías para aprobar los escaños de RP.

En esta problemática es claro que es necesario revisar la norma pero también hace falta pedagogía para que legisladores, consejeros y magistrados comprendan el sentido de la RP. Esto amerita una discusión general para que quede claro hacia dónde se quiere dirigir la conformación de los órganos legislativos y municipales porque mientras se siga considerando como un complemento segmentado de la vía mayoritaria seguirán presentándose problemas como los indicados anteriormente.

Nulidad de elecciones: Bochil, Chiapas (SX-JIN-22/2018 y SUP-REC-876/2018)

El distrito de Bochil, en el estado de Chiapas, es uno de los que está considerado con mayor población indígena con lo que era necesario que las candidaturas fueran de esta característica. La sala regional Xalapa anuló los comicios porque consideró que los ganadores no cumplían con el requisito de adscripción; esta sentencia fue impugnada en la sala superior que revocó la nulidad que había determinado la sala regional y adjudicó el escaño a la fórmula que había sido declarada ganadora.

La sentencia de la sala superior estipuló que, independientemente, de las características y de los antecedentes de los candidatos era suficiente con su adscripción y el reconocimiento por alguna comunidad asentada en el distrito respectivo, sin que fuera posible indagar si tales documentos eran válidos, ya que se consideran documentales públicos y, por ende, se consideran como suficientes para demostrar la auto adscripción.

La sentencia de la sala superior fue consistente con sus precedentes y con la regulación constitucional del artículo segundo que establece que son indígenas las personas que se auto

reconocen como tales mediante una declaratoria personal sin necesidad de mayor acreditación. El punto es que este procedimiento puede terminar generando problemas como ya sucedió en el distrito chiapaneco.

4. Conclusiones

Los criterios del tribunal en el ámbito de las candidaturas han sido estables. Aunque con una doble tendencia: en la etapa de registro a corregir las candidaturas, mientras que en la etapa de la asignación de escaños por mantener las postulaciones registradas por los partidos políticos.

De las nuevas problemáticas de candidaturas el TEPJF no ha generado propiamente una línea jurisprudencial porque algunas las ha resuelto con precedentes relativos a inelegibilidad e incompatibilidad, aún no siendo exactamente los mismos casos. Por otra parte, en la nueva problemática de adscripción la ha relacionado con la línea jurisprudencial de género y los precedentes los ha tomado de la auto adscripción en materia indígena aunque tampoco sean exactamente la misma problemática.

En lo que corresponde a las nulidades por violaciones constitucionales hubo claramente dos lecturas entre las salas regionales que anularon elecciones distritales y municipales frente a las determinaciones de la sala superior porque mientras para esta la determinancia era un requisito indispensable, algunas salas regionales consideraron que no era necesario acreditar la determinancia aunque otras salas sí la plantearon como indispensable. Esta claro que en esta problemática seguirá prevaleciendo la casuística y que no hay ni siquiera una línea jurisprudencial y mucho menos una política judicial para tomar las decisiones respectivas. Mientras no se generen criterios estables por el TEPJF se mantendrá el estudio por caso y los precedentes serán a los sumo indicativos de la decisión.

Algo similar ocurre con la temática de representación proporcional y no solamente por la diversas regulaciones que están planteadas en las leyes estatales sino también por la falta de consistencia en las determinaciones de las salas que, en lugar de inaplicar normas locales o mínimo realizar una interpretación constitucional, prefieren realizar la aplicación de las reglas aunque a veces sea francamente contradictorio sino es que paradójico el resultado

obtenido porque fórmulas supuestamente proporcionales terminan generando resultados de índole mayoritario que terminan favoreciendo a los partidos más grandes.

Esta problemática está más complicada que la anterior porque aquí sí hay desarrollo legal y para generar, aunque sea una línea jurisprudencial, habría que realizar interpretaciones constitucionales para establecer jurisprudencia y con ello resolver los casos que sean sometidos a revisión y no como se ha realizado hasta el momento (verano de 2018) que es de forma casuística. Lo determinado por la sentencia que resolvió la integración de la cámara de diputados federal que solicitó revisar la jurisprudencia va en este sentido, aunque eso no implica que de manera automática el TEPJF la enmiende y acepte las demandas futuras que se presenten por la inconstitucionalidad de varias regulaciones estatales en lo concerniente a la RP.

En resumen, las temáticas planteadas muestran problemas de diseño legal y de aplicación tanto administrativa como jurisdiccional, siguen siendo fuente de disputa y de polémicas entre los actores políticos y las autoridades electorales, además de entre ellas mismas. Es recomendable hacer las adecuaciones correspondientes para que disminuyan las problemáticas que han sido revisadas en la ponencia.

Referencias

Arzuaga Magnoni, Javier. 2012. Consideraciones sobre la democracia interna en los partidos políticos. México: Fontamara.

González Oropeza, Manuel y Báez Silva, Carlos. 2010. La intervención de los órganos electorales del Estado en la vida interna de los partidos políticos. México: UNAM.

Medina Torres, Luis Eduardo. 2015. “La justicia electoral mexicana y la resolución de disputas en la gobernanza electoral” en El nuevo sistema electoral mexicano en 2014. México: UAM.

Medina Torres, Luis Eduardo. 2016. Gobernanza y régimen electoral en la reforma política de 2014. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México.

Medina Torres, Luis Eduardo y Ramírez Díaz, Edwin Cuitláhuac. 2015. “Electoral Governance. More than electoral administration” en Mexican Law Review. México: UNAM.

Jurisprudencia y Sentencias

Jurisprudencia 20/2015: Candidatos a cargos de elección popular. Pueden ser postulados por un partido político diverso al que se encuentran afiliados, cuando exista convenio de coalición.

Candidaturas y elegibilidad: casos de Michoacán (SUP-REC-709/2018), Hidalgo (SUP-REC-871/2018), Veracruz (SUP-REC-816/2018 inelegible), Chiapas (SUP-REC-874/2018) y Nayarit (SUP-REC-822/2018 inelegible)

Candidaturas y adscripción: Chiapas (SX-JIN-22/2018) y Oaxaca (SUP-JDC-304/2018)

Candidaturas, sustituciones y coaliciones: impugnaciones y sentencias de RP SUP-REC-943/2018, SUP-REC-940/2018

Nulidad de elecciones: Bochil, Chiapas (SX-JIN-22/2018 y SUP-REC-876/2018)

Resultado y cambio de ganador: Durango (SUP-REC-820/2018 y acumulado), Yucatán (SUP-REC-782/2018)

Representación proporcional, sobre representación y desproporcionalidad: sentencias SUP-REC-934/2018